



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

Magistrado

Proceso: Ejecutivo
Demandante: BANCO DAVIVIENDA S.A.
Demandado: INVERSIONES ALCAVAL S.A.S.
Radicado: 050013103015 2017-00359-01
Decisión: Confirma.
Sentencia No. 026

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, trece de septiembre de dos mil
veintiuno.

Se procede a decidir por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia del 2 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso ejecutivo instaurado por BANCO DAVIVIENDA S.A. en contra de INVERSIONES ALCAVAL S.A.S y la señora GLAFIRA TABARES RAMIREZ.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretendió el banco demandante que se librara mandamiento ejecutivo a su favor y en contra de los demandados por la suma de \$137.629.958.00 m.l. como capital, representado en el pagaré Nro. 700259; por los intereses causados y no pagados equivalentes a la suma de \$15.573.471.00; más los intereses de mora sobre el capital

causado desde la fecha de presentación de la demanda y hasta el pago total de la obligación.

1.2. Como sustrato de sus pedimentos, adujo que los demandados suscribieron pagaré a favor de Davivienda un título valor pagaré No. 700259, por valor de \$137.629.958,00 m. l., al cual no se le han hecho abonos encontrándose en mora en el pago de las cuotas o el capital, estipulándose además intereses de retardo a la tasa máxima legal permitida.

1.3. Mediante providencia del 13 de julio de 2017 libró orden de apremio.

1.4. Una vez notificados los demandados a través de curador ad-litem, dieron respuesta a la demanda arguyendo que si bien en la carta de instrucciones se dan unas autorizaciones relativas al incumplimiento de la obligación no se especifica a cargo de quien ni en razón de que, haciéndose imposible determinar las obligaciones que se autorizaron incluir en el pagaré en blanco por parte de la ejecutante. Se opuso a las pretensiones y formuló como medio exceptivo: *"EL DOCUMENTO (Pagaré) BASE DE LA EJECUCIÓN NO PUEDE HACERSE VALER CONTRA LA DEMANDADA"*

De las excepciones propuestas se corrió el traslado respectivo a la parte demandante, que dentro del término oportuno no se pronunció, dictándose sentencia anticipada.

II. LA SENTENCIA APELADA

En audiencia del 2 de diciembre de 2020 el JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN declaró no probada la excepción propuesta, ordenó seguir adelante con la ejecución, el avalúo y remate de los bienes, y la liquidación de costas y del crédito.

III. LA IMPUGNACIÓN

3.1. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación arguyendo como reparos concretos los siguientes:

1. Disiente argumentando que la sentencia se emitió sin haber agotado las pruebas solicitadas por las partes y sin pronunciarse sobre las mismas para poder ejercer el derecho de defensa que le asiste, pues se solicitaron varias para determinar la realidad de las obligaciones objeto de las obligaciones en el pagaré base de recaudo y el diligenciamiento del mismo

2. Difiere con la decisión al estimar que se pasa por alto lo expuesto en las excepciones formuladas respecto del título valor, pagaré en blanco con carta de instrucciones, pues si ese documento fuera llenado estrictamente o conforme a las instrucciones; el mismo podría hacerse valer frente a cualquiera que haya intervenido antes de llenarse, pero como ello no se cumplió no puede hacerse valer contra la demandada.

Insiste en que en efecto se dan unas instrucciones pero no se especifica a cargo de quien, ni en razón de que, lo que hace imposible determinar las prestaciones que se autorizaron incluir en el pagaré en blanco, lo cual comporta una integración abusiva del pagaré en blanco por parte del ejecutante.

Advierte que el número del pagare inserto en la carta de instrucciones corresponde a una tipografía de maquina, sin asemejarse a la caligrafía de quien supuestamente otorgó el mismo ni con la de quien supuestamente otorgó el pagaré en blanco o del ejecutante.

Por lo anterior solicitó revocar la sentencia, pues no es posible continuar con la ejecución.

Recibido el copiado en esta Corporación, se procedió a admitir el recurso de apelación interpuesto. Por auto del 25 de junio de 2021 se corrió traslado al apelante para sustentar el recurso, quien lo hizo en los mismos términos ya indicados.

Luego de descrito el traslado para alegar la parte demandante quien no se pronunció. Siendo el momento para decidir, a ello se procede previas las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Al no advertirse ningún vicio que pueda invalidar lo actuado y al estar cabalmente satisfechos los presupuestos procesales, procede esta Sala de Decisión a dilucidar el mérito que al asunto corresponde.

Igualmente debe indicarse que conforme a lo establecido en el Decreto 806 de 2020 de la Presidencia de la República, se facultó al Juez de Segunda instancia para dictar sentencia por escrito, conforme a lo cual procederá esta Corporación.

4.2. Conforme a la competencia restringida del superior en sede de apelación, prevista en el artículo 328 del Código General del Proceso, habida cuenta del carácter rogado del recurso de apelación formulado sólo por la parte demandada, la competencia se limita a los motivos de inconformidad expuestos por la parte recurrente.

En este sentido, el estudio de la Sala de Decisión se concretará en verificar si (i) en este caso se dan los elementos para dictar sentencia anticipada como lo establece el artículo 278 del C. General del P., y

si (ii) los documentos aportados por el acreedor cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 422 del C. General del P., y si el llenado el título valor se dio acorde con las instrucciones dadas por el deudor, según lo indica el artículo 622 del C. de Co.

4.3. Para resolver el primero de los problemas jurídicos plantados, es preciso advertir que la sentencia anticipada es una figura que se encuentra actualmente regulada en el artículo 278 del Código General del Proceso con el fin de dar mayor celeridad a los procesos judiciales, dictándose fallo de fondo sin tener que agotar todas las etapas procesales, para brindar una solución pronta a los litigios. En este artículo se establece que:

"(...) En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

- 1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*
- 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.*
- 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa".*

Se tiene entonces que es un deber - poder y no una facultad del juez dictar sentencia anticipada si se cumplen cualquiera de las tres hipótesis anteriormente enlistadas y para el caso en concreto la prueba de la excepción formulada es documental, debido a que es la carta de instrucciones el medio de convicción necesario para establecer el supuesto de hecho que pretende la parte demandada, razón por la cual el juez podía prescindir de las demás probanzas que no habían sido decretadas. Lo anterior, pese a lo indicado por el inconforme, fue advertido por el Juez al momento de dictar sentencia

al afirmar que rechazaba las pruebas solicitadas por el demandado al considerarlas inconducentes para esclarecer el hecho alegado, acorde con lo establecido en el artículo 168 ibídem.

4.4. Analizado lo anterior, se detendrá la sala en el análisis del título valor aportado acorde con el reparo realizado por el curador de los demandados.

Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 422 del General del Proceso, por vía ejecutiva *"...Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y que constituyan plena prueba contra él..."*.

Ahora bien, según el contenido de los artículos 174 y 177 de la misma obra procesal, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; además, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

En ese sentido, la parte demandada repara en que el título fue llenado sin respetar las condiciones pactadas, pues no se indicó allí a cargo de quien o en razón de que; lo que hace imposible determinar las prestaciones que se autorizaron incluir en el pagaré en blanco, lo cual comporta una integración abusiva del pagaré en blanco por parte del ejecutante.

En punto al tema, indica el artículo 622 del C. de Co que: *"Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de*

completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas"

De manera que, los títulos que se suscriban en blanco, pueden llenar sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se llenó de acuerdo a las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complementó los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron. Por su parte la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 15 de diciembre de dos mil nueve, en el expediente No. 05001-22-03-000-2009-00629-01 M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar reiteró que se admite de manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear títulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibición tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el tenedor de conformidad con las órdenes emitidas por el suscriptor. Ahora, si una vez presentado un título valor, conforme a los requisitos mínimos de orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada le incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco; y, en segundo, evidenciar que se llenó de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título.

En ese orden de ideas el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en providencia del 30 de junio de 2009 en el proceso No. T-05001-22-03-000-2009-00273-01 M.P. Edgardo Villamil Portilla precisó:

"...conforme a principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de defensa el demandado puede formular excepciones

de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este medio de defensa surge diáfano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jurídicos que persigue este último, enervando.

(...)

...adicionalmente le correspondería al excepcionante explicar y probar cómo fue que el documento se llenó en contravención a las instrucciones dadas.

Por ende, el hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras, era cuestión que por sí sola no les restaba mérito ejecutivo a los referidos títulos, pues tal circunstancia no impedía que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del título y su consiguiente exigibilidad.

No podía, entonces, invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar cómo y porqué llenó los títulos, sino que aún en el evento de ausencia inicial de instrucciones, debían los deudores demostrar que tampoco las hubo con posterioridad o que, en todo caso, el acreedor sobrepasó las facultades que la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados.”

De manera escrita puede constar en el mismo documento o en llamada carta de instrucciones, o en un documento aparte que contenga el negocio jurídico que le dio origen al título-valor en blanco v.gr. en una compraventa. Aunque en estas dos últimas formas, se presenta una dificultad práctica, ya que la circulación del título valor en blanco queda sometida al acompañamiento de la carta de instrucciones o del documento en donde consten las instrucciones.

En conclusión, los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco, pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se llenó de acuerdo a las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complementó los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron. Acorde con lo anterior, se echa de menos, en este caso, que el censor hubiese aportado elemento de convicción en tal sentido.

Al respecto se tiene que con la demanda se aportó "CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARE PERSONA JURÍDICA Y PERSONAL" para al pagaré Nro. 700259, pactándose que la señora Glafira Tabares Ramírez, obrando en nombre de INVERSIONES ALCAVAL S.A.S. en calidad de representante legal: *"... de acuerdo con el artículo 622 del Código de Comercio, autorizo(amos) al BANCO DAVIVIENDA S.A., su cesionario o tenedor legítimo del pagaré, en forma irrevocable y permanente, para diligenciar sin previo aviso los espacios en blanco contenidos en el pagaré que ha sido otorgado a su orden y consta en la hoja número 700259, cuando exista incumplimiento de cualquier obligación a mi (nuestro) cargo o se presente evento que permita al BANCO DAVIVIENDA S.A., su cesionario o tenedor legítimo del pagaré, acelerar la obligación legalmente o conforme a cualquiera de los documentos que haya(mos) suscrito o aceptado, todo de acuerdo a las siguientes instrucciones ..."* indicándose allí que (i) la fecha de vencimiento sería el día siguiente a la fecha en que el tenedor legítimo procediera a diligenciarlo; (ii) el monto del capital sería el de todas las obligaciones exigibles, incluidas impuestos, timbres, primas de seguros, cuotas de manejo y otros gastos asociados al crédito, así como los intereses generados; (iii) igualmente se pactó cláusula aceleratoria; y (iv) que el banco diligenciara los nombres y apellidos y la calidad en la que actuaban así como el lugar del pago y fecha de suscripción de los documentos referidos.

De manera que, una vez revisado el pagaré objeto de recaudo se tiene que el deudor autorizó al Banco Davivienda a llenar el pagaré con los datos que el acreedor considerará pertinentes, de acuerdo a lo pactado con ellos, sin que alcanzará a demostrar que no fueron así las instrucciones dadas. Ahora bien, allí se determinó claramente que se debía, a quien se debía y cuando se realizaría el pago. Es importante además tener en cuenta que le correspondía a la parte demandada demostrar que lo consignado en el título valor no se dio acorde con las instrucciones dadas, y pese a que no existe tarifa legal para probarlo el resistente estaba conminado a aportar las respectivas pruebas que sobre este tópico tuviera en su poder, cosa

que no realizó y sin que fuera procedente en esta instancia valorar una inversión de la carga de la prueba como lo pretende el demandado para su falencia probatoria, pues acorde con el artículo 167 del C. General del P. la misma se debió dar en primera instancia.

Finalmente, respecto de la inserción en la carta de instrucciones de un número de manera mecánica, debió la parte demandada, si lo consideraba una alteración al mismo tacharlo acorde con las normas procesales para tal actuación.

De acuerdo con lo analizado, los argumentos de la inconformidad por el deudor respecto de los requisitos establecidos en el artículo 422 del C. General del P. y 622 del C. de Co., no saldrán avantes, pues nada diferente a lo ya indicado se probó en este asunto.

Bajo esta perspectiva, resulta diáfano concluir que la sentencia motivo de inconformidad debe ser CONFIRMADA. Se condena en costas a la parte demandada y a favor de la parte demandante.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado Quine Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso ejecutivo instaurado por BANCO DAVIVIENDA S.A. en contra de INVERSIONES ALCAVAL S.A.S y la señora GLAFIRA TABARES RAMIREZ.



SEGUNDO. Se condena en **COSTAS** a la parte demandada y a favor de la parte demandante.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín